



Resuelto el conflicto bélico con las FARC, a Colombia le espera afrontar uno de los más grandes dramas humanitarios que deja como un penoso lastre la guerra: las víctimas inocentes de minas antipersonal.

Y esa no es una situación exclusiva del posconflicto colombiano. Al igual que nuestro país, otros países en donde se ha superado el conflicto, como El Salvador y la frontera entre Chile y Perú en América, así como ocho países africanos, seis asiáticos y dos europeos adelantan procesos de desminado, con la inevitable pérdida de vidas humanas ajenas a dichas confrontaciones.

Por eso, uno de los más complejos dilemas que tendrá que encarar la sociedad colombiana de cara al posconflicto, pero en especial el Estado, los desmovilizados de las FARC y, de manera más crítica, los campesinos e indígenas, es el proceso de desminado en las zonas rurales de todo el territorio nacional.

La complejidad del asunto radica en las múltiples dificultades que implica dicho proceso, debido a la coincidencia de factores desfavorables que entorpecen, prolongan, agravan y encarecen la erradicación de minas antipersona en el campo colombiano, con el permanente e inminente riesgo para la vida y la tranquilidad de sus habitantes.

Factores como la invisibilidad de esos objetos letales al ojo humano, la tecnología desarrollada hasta ahora para ser detec-

tados, la ausencia de una base de datos georreferenciados en las filas guerrilleras que faciliten su ubicación, la distribución indiscriminada en el territorio, las difíciles condiciones de dicho territorio y hasta la falta de memoria de sus “sembradores” o de su ausencia definitiva al fallecer en el fragor de la guerra, perfilan un panorama caótico a la hora de asumir este reto, clave para la consolidación de una paz estable y duradera, en especial, en la Colombia rural, la más afectada con esta amenaza latente.

A la fecha, se han registrado 11.495 víctimas por minas antipersonal y munición sin explotar, siendo 2006, el año más crítico pues se presentaron 1.232 víctimas, el mayor número en toda la historia de Colombia. En la última década, la tendencia ha venido cayendo, con excepción del año 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que no se presentaban desde el año 1999. En lo corrido de 2017, se han presentado 20 víctimas en 11 municipios de 9 departamentos del país.

Esta problemática ha dejado heridas al 80 % (9.223) de las víctimas y 2.272 personas han fallecido a causa del accidente, es decir, 1 de cada 5 víctimas muere. Por otra parte, Colombia ha sido uno de los países del mundo con más cantidad de víctimas de la fuerza pública y esto ha significado que del total de víctimas, el 61 % han sido miembros de la fuerza pública y 39 % restante, corresponde a civiles (fuente: www.accioncontraminas.gov.co).

“La mayoría (86 %) de las víctimas han sido personas mayores de edad de sexo masculino (9.936), una gran parte de estas víctimas pertenecen a la fuerza pública. Si bien, al solo tener en cuenta en las víctimas civiles, el grupo demográfico más afectado, de nuevo, son las personas mayores de edad de sexo masculino (65 %); el segundo grupo que muestra mayor afectación son los menores de edad del sexo masculino (20 %) y luego están las personas mayores de edad del sexo femenino y las menores de edad del sexo femenino con 8 % y 6 %, respectivamente”.

De la corrección a la prevención: investigación y educación para la defensa de la vida

Ante este enorme desafío, el Gobierno nacional, en su deber constitucional de garantizar la vida de todas las personas residentes en el país, adelanta una serie de programas con el apoyo y acompañamiento de los gobiernos de varios países, de organismos multilaterales como la ONU y de algunas Organizaciones No Gubernamentales, ONG nacionales y extranjeras, para desminar los territorios con recursos humanos, logísticos y financieros, para lo cual se ha fijado un plazo de 10 años, plazo que para los expertos es una utopía, países con situaciones similares, como Vietnam, en Asia aún no logran limpiar su territorio, más de 40 años después de superado el conflicto.

Sin embargo, mientras se surten todos los efectos administrativos, propios de un proceso de este tipo, y se superan las dificultades ya señaladas sobre la certeza de la ubicación de los territorios minados a lo largo y ancho del territorio colombiano, así como los millonarios costos económicos que implica desactivar una mina artesanal que cuesta entre tres mil y cinco mil pesos, pasará un tiempo valioso, VITAL para salvaguardar la integridad de los pobladores del campo y reactivar su productividad.

Y es allí donde la academia, a través de la investigación, la comunicación y la educación para la prevención, cumple un papel determinante para proteger la vida en aquellas regiones sitiadas por el poder letal de las minas.

En ese sentido, la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, fiel a la misión institucional de aportar a la “...solución de problemas, mediante la docencia, la investigación y la Extensión





en su entorno local, regional, nacional e internacional”, ha creado las condiciones necesarias para que tanto su programa de pregrado en Investigación Criminal, como su Maestría en Criminalística y Ciencias Forenses, estén a la altura del reto que implica, para el presente y el futuro del país, el exigente, dispendioso y costoso proceso de desminado.

En consecuencia, y tal como está sustentado en la presentación del programa, el pregrado de Investigación Criminal “... busca ofrecer al sistema judicial personal altamente calificado en investigación criminal y ciencias forenses, capacitado para el apoyo técnico-científico a la Administración de Justicia, al sistema de defensoría pública penal y a los abogados litigantes”.

Por lo tanto, son “... profesionales idóneos para realizar procesos de investigación criminal de alta complejidad”, que aporten información relevante para el esclarecimiento y la persecución de delitos nacionales y transnacionales, así como información relevante, bien sea para la Administración de Justicia o para los abogados.

PICMA: investigación e innovación para la prevención

Consciente de la urgencia de tomar decisiones y emprender acciones que impacten de manera adecuada a las comunidades directamente afectadas por la perdurabilidad de los rezagos del conflicto como las minas antipersonales MAP o las municiones usadas sin explosionar, REG, o los artefactos explosivos improvisados, AEI (de carácter artesa-

nal), llamadas popularmente “minas quiebra-patas”, el programa de Investigación Criminal dio vida al semillero de investigación especializado denominado, PICMA, Programa de Prevención e Investigación Contra Minas Antipersonas.

Allí los estudiantes, acompañados de profesores y con la participación del grupo de Derecho Hecho Realidad, comenzaron a profundizar en el conocimiento de los entornos de los territorios minados y cómo aquellos artefactos artesanales, tales como las MAP, las MUSE y las AEI se tornaron invulnerables a los métodos técnicos y mecánicos de detección, incrementando su poder de sorpresa y de peligro, especialmente para las comunidades cercanas a dichos territorios.

Con base en los análisis hechos, PICMA optó por diseñar una estrategia soportada en estimular la prevención en las comunidades, compartiendo todo el conocimiento adquirido durante sus tareas de investigación, de manera que el nivel de riesgo y de afectados se redujera a partir de la construcción de una cultura de la supervivencia y el autocuidado en entornos sitiados por explosivos.

Único campo minado de experimentación en el país

Para potenciar sus procesos de investigación en terreno que permitan una vivencia más apropiada de las circunstancias reales que un sujeto enfrenta cuando cae en un campo minado, y así se facilite la orientación en los procesos de capacitación, PICMA cuenta con el único campo minado real de experimentación en un centro universitario, dotado de 40 arte-

factos explosivos debidamente georreferenciados, construido en el año 2013 y ubicado en el costado suroccidental del campus de la Universidad de Medellín, en el barrio Belén Altavista, suroeste de la ciudad de Medellín.

Además de ello, el trabajo de entrenamiento y capacitación se complementa con salidas de campo a otro territorio minado, en una propiedad campestre de la Universidad, fuera de la ciudad de Medellín, en donde los estudiantes amplían y profundizan sus conocimientos en el área.

A partir de ese conocimiento y las destrezas adquiridas, se diseñaron actividades lúdico-educativas a través de las cuales se comenzó a transmitir, a las comunidades más propensas a ser afectadas, un mensaje de prevención acerca de cómo identificar las MAP y/o AEI; qué hacer en caso de estar en presencia de uno de estos elementos, qué evitar hacer, pero, también, qué hacer en caso de ser víctimas.

Para facilitar que su mensaje fuera captado por las comunidades recurrieron a diferentes estrategias y canales comunicativos como realizar obras de teatro, desarrollar charlas, imprimir volantes, producir comerciales de televisión, componer canciones y ejecutar actividades recreativas, con el propósito de concienciar a la población frente a la amenaza latente que padecen y cómo “convivir” con ella sin morir en el intento.

Reconocimiento y alcance

Claro en su misión, PICMA comenzó a desarrollar una labor que bien pudiera

considerarse como apostólica, puesto que, a través de una pedagogía de la supervivencia, aspira arrebatarse víctimas a una de las prácticas más horrendas de la guerra, y lesiva de los derechos humanos, como la de sembrar de minas nuestros campos, en un país que, con múltiples limitaciones como la económica, la tecnológica y la educativa, especialmente en su población rural, aspira a vivir una etapa de posconflicto con la menor incidencia de secuelas de la amarga confrontación bélica.

Como sí ha acontecido en otros posconflictos, como el de la Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), que en años posteriores cobró víctimas de minas en las llanuras africanas, o luego de la guerra de Vietnam, con víctimas en campos minados que aún no han sido totalmente desprovistos de estos fatales mecanismos no convencionales de confrontación armada, según lo han documentado organismos como la Organización de Naciones Unidas.

Y en su cometido, PICMA se ha constituido en una fuente confiable de información para la orientación de la opinión pública en el asunto de desminado, con entrevistas, informes y documentales que registran su gestión en medios radiales, impresos y televisivos como el periódico ADN, el telenoticiero Hora 13 noticias, del canal regional Teleantioquia, el canal local TeleMedellín, Caracol, Todelar, Múnera Eastman y RCN radio, Caracol Televisión, Telemundo, así como varias radioemisoras de la región de Urabá, además de otros canales institucionales como la revista Planeta Rojo y el micro espacio informativo, Notas Info.



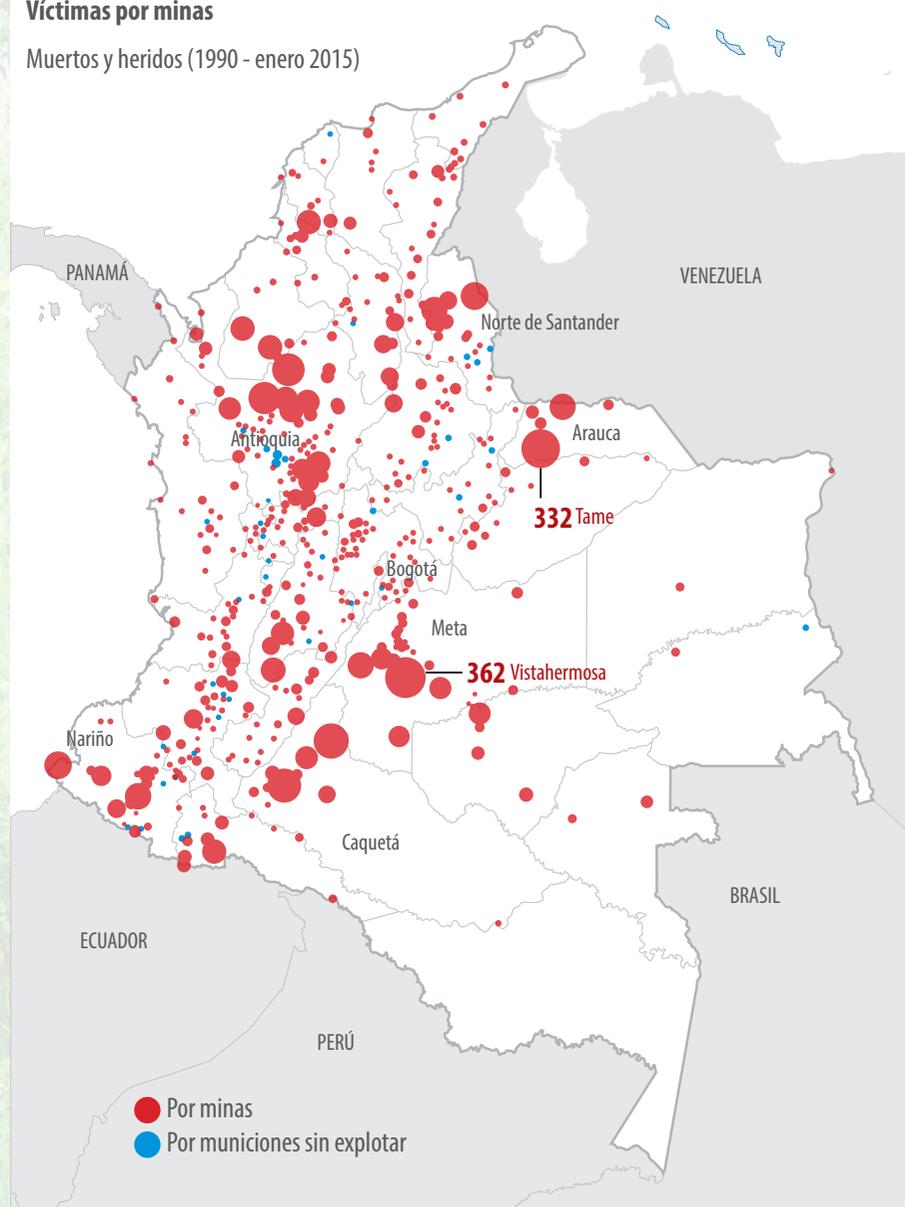
Su experiencia y conocimiento se replica en poblaciones afectadas por campos minados a donde han asistido a capacitar a la comunidad para prevenir un accidente fatal, como en los municipios antioqueños de Argelia y Nariño.

También han brindado capacitación a entidades nacionales e internacionales, entre ellas:

- Cruz Roja internacional y colombiana en todo lo relacionado con los artefactos explosivos improvisados (AEI), minas anti-persona (MAP) y munición sin explotar (MUSE), con el fin de aplicar este conocimiento a la extracción de heridos de un campo minado.
- Circuito forense dirigido a integrantes de la policía de Honduras y de la DIJIN colombiana.
- Capacitación dictada a Maestría en Derecho de la Universidad de Medellín en un programa concentrado para extranjeros no residentes en Medellín al cual asistieron fiscales del Perú.
- Proyecto radar de penetración para detección de minas antipersonal (proyecto en curso) COLCIENCIAS.

Victimas por minas

Muertos y heridos (1990 - enero 2015)



Fuente: Dirección Contra Minas de la Presidencia de Colombia.

